

Esterilizaciones forzadas: La justicia espera

- María Esther Mogollón



El reciente anuncio del fiscal de la Nación, doctor José Peláez Bardales, de que se reabrirán los casos de esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori, ha provocado reacciones positivas de las víctimas, quienes esperan justicia hace ya quince años.

El argumento con el que se reabre el caso es el de “crimen de lesa humanidad”, ya que las pobres razones de los archivamientos de fiscales anteriores hablaban de delitos comunes que ya habían caducado. El caso, integrado por más de 2.073 nombres y testimonios de víctimas, había estado casi siete años en la Fiscalía Provincial de Delitos contra los Derechos Humanos, que decidió el archivamiento, y en diciembre de ese mismo año la Fiscalía Superior de Derechos Humanos lo confirmó.

Hay que reconocer también que el anuncio de reabrir el caso se hizo cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisaba el caso de Mamérita Mestanza, una campesina de Cajamarca que murió como consecuencia de la esterilización forzada y subsecuentes complicaciones. La solución amistosa obtenida durante el gobierno de Alejandro Toledo no había cumplido otros acuerdos y requería su revisión.

El [camino seguido](#) por las mujeres cuyos derechos fueron violados ha sido tortuoso, agobiante; ha conducido a muchas a la depresión, y a la indignación de los que hemos estado cerca de las campesinas de Anta, cuyo mérito fue haber puesto el rostro y el nombre desde 1997.

“Creamos nuestra organización, la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Cusco (AMAEFC), para tener voz propia, para luchar por justicia y la recuperación de

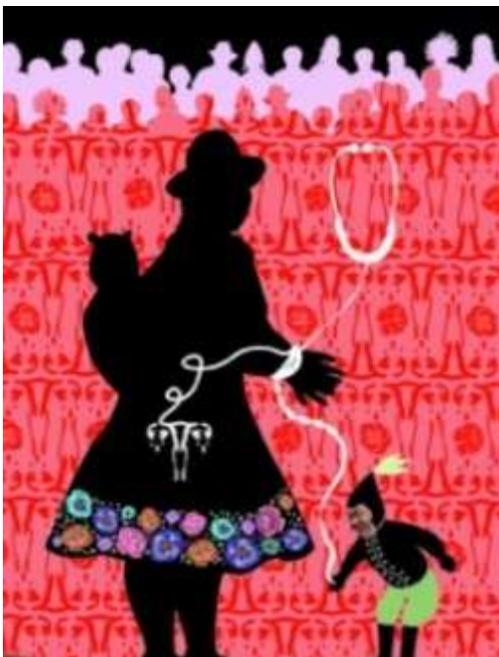
nuestra salud”, dice Aurelia Paccohuanca, presidenta de AMAEFC. “El Poder Judicial ya aplicará las penas y los resarcimientos. No queremos que más mujeres sean esterilizadas, ni en el Perú, ni en el mundo”, dice.

Buscando justicia, verdad y reparación, ellas han trajinado por sus comunidades de la provincia de Anta; incluso, un grupo de 12 víctimas, mujeres emblemáticas, llegó a Lima en el año 2001, cuando la democracia se había instaurado y la confianza de que era el contexto aparente las estimuló. Entonces solo lograron la conformación de una comisión especial investigadora de la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), que emitió 54 nuevas evidencias adicionales a las que ya existían. Ellas eligieron como su representante en dicha comisión a la hoy parlamentaria andina Hilaria Supa Huamán.

Debe recordarse que las víctimas eran miles de mujeres pobres, indígenas y campesinas, muchas de ellas quechua hablantes, en cifras que llegaron a las 300 mil. También se aplicó la vasectomía a hombres procedentes del Ande y la selva. Además, los números hablan de 18 mujeres fallecidas como consecuencia de las esterilizaciones forzadas (o AQV), nombre con el que se conoce a la política pública aplicada por el gobierno fujimorista entre 1996 y el 2000.

“Esperamos que la reapertura del caso sea para encontrar justicia de verdad. No podemos permitir más la impunidad”, dice Hilaria Supa Huamán, al recordar el camino recorrido y los apoyos de Giulia Tamayo, CLADEM Regional y el Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional.

El camino seguido por las mujeres cuyos derechos fueron violados ha sido tortuoso, agobiante; ha conducido a muchas a la depresión, y a la indignación de los que hemos estado cerca de las campesinas de Anta, cuyo mérito fue haber puesto el rostro y el nombre desde 1997.



Mecanismos de presión y miedo Aunque se ha encontrado que la mayoría de veces no se aplicó el consentimiento informado, a ello hay que agregar los métodos empleados con las campesinas y sus familias. Algunos testimonios ilustran lo sucedido: las modalidades empleadas para lograr el objetivo y las metas de la política aplicada se sustentaron casi siempre en la amenaza y el miedo:

Después de dar a luz, a los tres días me fui del Hospital. Pero a la fuerza me he venido [...] han exigido que me opere: "Si no te vas a operar no te vamos a dar su certificado de tu hija para que la hagas asentar". Así me dijeron... (Luzmila, operada a los 35 años, natural de Pampaconga, Anta).

Podemos observar la amenaza a Luzmila de no inscribir a su hija recién nacida si no se dejaba operar.

Estuve embarazada y cada mes cumplía con mis controles en el Centro de Salud de Anta. El último mes me sentía mal. A la fuerza sacó a mi bebé. Al reaccionar sangraba bastante; me pusieron gasas y durante 8 días seguía con la hemorragia. En el Centro de Salud no querían atenderme, hasta que lo hicieron, me pusieron anestesia, me dijeron que me habían ligado [...] desde entonces me siento mal (Hilaria, operada a los 42 años, Anta).

El caso de Hilaria es indignante: casi la obligaron a parir; le dejaron gasas en su organismo y cuando fue al centro médico para que la atiendan, la esterilizaron.

Cumplía con mi control en el Centro de Salud de Hurocondo. Después que di a luz, la señorita Meche me conversó sobre la ligadura de trompas. Mi esposo no aceptó; mucho menos yo [...] Me insultaron, me compararon con los chanchos y cuyes. Iban a mi casa reiteradas veces y yo me ocultaba. Me dijeron que no me darían el certificado de nacimiento de mi hijo si no me ligaba. Al mes le llevé a mi hijo para su control. Trajeron a mi esposo con policías y le obligaron a que firme, y cuando se negó a firmar le quisieron detener. Me asusté mucho y me escapé [...] la obstetra me siguió y me cogió, me tiró a una camilla, me ataron los pies y las manos, me inyectaron, me operaron [...] se infectó mi herida (Rudecinda, operada a los 24 años, Anta).

Rudecinda narra varias situaciones. La lectura de su testimonio es ilustrativa de los métodos usados para esterilizarla, incluyendo la participación de la Policía.

Pensando que no me iban a ligar, me fui al Hospital Antonio Lorena del Cusco, y me encuentro con las enfermeras de Maras que habían llevado a otras mujeres para hacerles ligar [...] te escapaste pero ya caíste [...] di a luz y le dijeron a mi esposo que vaya a comprar ropitas para el bebe [...] me dijeron que me ligarían; sabían que yo no quería. Luego me amarraron las manos y pies, me pusieron suero. No me dieron comida; yo tenía mucha hambre; me purgaron. Escuchaba gritos de mujeres y tenía miedo. A mi esposo le habían hecho firmar con engaños diciendo que era para inscribir a mi bebé, quien quedó solo en la sala donde me ingresaron.

Yo no reaccionaba. Sentía que me llevaban a otro sitio [...] nadie le daba razón a mi esposo de dónde estaba yo. Ya tarde grité y escucharon las personas que fueron a buscar a un pariente muerto en la morgue. Me habían llevado a la morgue, me habían dado por muerta (Serafina, operada a los 34 años, Mahuaypampa, Anta).

Serafina es ahora regidora en su Municipalidad. Su testimonio es uno de los más escalofriantes, y demuestra el abuso y la prepotencia empleados contra ella.

Yo estaba gestando. Me visitaron dos enfermeras en una ambulancia [...] les comenté de mi embarazo y no me creían. Me hacen análisis y me dicen que no estaba gestando. Yo insistí que sí. Me echaron en una camilla, me amarraron las manos y los pies, me hincaron con aguja. Yo lloraba y lloraba y me quedé dormida [...] me habían operado. Pasaron días, se abrió mi herida, tenía miedo. Sentí que mi hijo se movía en mi vientre. Fui a la posta: las enfermeras y el doctor me pidieron que no diga nada a nadie. Me echaron a la camilla, me hincaron con agujas. Sentí que se adormeció mi cuerpo; sentía que algo cortaban y sacaban por mi parte genital. Tres días me hicieron lo mismo. Entonces me lo sacaron a mi bebito. Me dieron de alta, me fui a mi casa a pie y sola. Desde esa fecha me siento mal (Guillermina, operada a los 28 años, Anta).

Guillermina se sobrepone al dolor y cuenta su dramático caso: esterilizada contra su voluntad, tuvo que afrontar la pérdida de su bebe producida por el propio personal médico.

Los impactos sufridos por estas mujeres aún no son motivo de investigación. Han brindado su testimonio para dar cuenta de las violaciones sufridas con las políticas aplicadas por el gobierno de Alberto Fujimori. Hacemos énfasis en las víctimas, para recordarles a las autoridades y a la sociedad en su conjunto que las esterilizaciones fueron hechas a personas: a mujeres, hermanas nuestras, pues en el debate y el silencio de muchos, la voz de ellas no fue escuchada. La discriminación y el racismo también se agregan a la serie de violaciones que sufrieron.

“Las víctimas de graves abusos contra los derechos humanos suelen ser incómodas, pues interpelan nuestra conducta y nuestra indiferencia ante sus padecimientos: ¿Dónde estuviste tú cuando esto me acontecía? En cierta forma el Perú tiene que abandonar más temprano que tarde esa tradición cainita de desentenderse del crimen. La justicia para las víctimas de las esterilizaciones forzadas pone a prueba esa oportunidad”, ha señalado Giulia Tamayo, una de las investigadoras del caso.

Se reabrieron los casos. Se espera justicia y el fin de la impunidad.